

Opinión

Seguridad sin relato no basta: cuando el miedo le gana a los anuncios



Patricio Meza García,
 Administrador en Seguridad
 Pública

La seguridad pública no se mide solo en cifras, operativos o balances semanales. Se mide, sobre todo, en la tranquilidad con que una familia sale de su casa, en la confianza con que un comerciante baja su cortina al final del día y en la certeza de que el Estado está presente, no de manera ocasional, sino de forma permanente, visible y eficaz. Ese es, precisamente, uno de los principales desafíos que sigue enfrentando el actual gobierno en materia de seguridad y migración: el alto nivel de temor ciudadano.

Y ese miedo, hay que decirlo con claridad, no se combate con resultados parciales, ni con conferencias de prensa

montadas en puntos específicos, ni con una narrativa insistente sobre lo bien que se están haciendo las cosas. El temor ciudadano es más profundo, más cotidiano y más persistente. Se instala en la experiencia diaria de barrios que sienten abandono, en las comunas que observan descontrol migratorio en sus fronteras o en sus espacios públicos, y en una ciudadanía que percibe que el Estado llega tarde, reacciona a medias o simplemente no logra ordenar la realidad.

Por eso, cualquier nueva medida que impulse el gobierno en seguridad y migración debe partir de una base irrenunciable: el estricto cumplimiento de la ley y el cabal funcionamiento de las instituciones. No basta con anunciar planes, endurecer el tono o instalar nuevos eslóganes si Carabineros, la PDI, las delegaciones, el sistema judicial, los municipios y los organismos de control no actúan con coordinación, continuidad y sentido de urgencia. La institucionalidad no puede operar a media máquina mientras la ciudadanía vive con miedo a tiempo completo.

En ese contexto, la experiencia reciente deja lecciones que no pueden ser ignoradas. "Calle sin Violencia", por ejemplo, nunca logró

transformarse en una política con identidad clara para la ciudadanía. Sus cambios de diseño, sus ajustes sucesivos y, sobre todo, la dificultad para entender con precisión cuál era su propósito central, terminaron debilitando su impacto. Más que una política consolidada, pareció por momentos una estrategia en permanente reformulación. Y en seguridad, cuando una política cambia demasiado, pierde fuerza, credibilidad y presencia pública.

Algo parecido ocurrió con varios programas preventivos que fueron anunciados con fuerza, pero que rápidamente se desdibujaron de la memoria ciudadana. Ese es un problema serio. En política pública, especialmente en seguridad, lo que no permanece en la memoria simplemente deja de existir. Y si la gente no logra reconocer una acción estable, visible y constante del Estado, entonces la percepción de inseguridad sigue creciendo incluso cuando algunos indicadores puedan mostrar mejoras puntuales.

Ese divorcio entre estadísticas y percepción no debe seguir siendo tratado como un problema secundario. La sensación de inseguridad no es una exageración colectiva ni una distorsión mediática automática. Es

una expresión social de desconfianza frente a un Estado que muchas veces no logra demostrar control territorial, capacidad preventiva ni continuidad en sus respuestas. Cuando el ciudadano ve comercio informal desbordado, fronteras frágiles, delitos violentos en aumento mediático y escasa presencia estatal sostenida, el mensaje que recibe no es de orden, sino de vulnerabilidad.

En materia migratoria, además, el desafío es todavía más delicado. Chile necesita una política clara, firme y ejecutable. Una política que combine respeto a la dignidad humana con control efectivo de fronteras, expulsiones cuando correspondan, trazabilidad de ingresos, coordinación policial y una señal inequívoca de que el país no puede seguir normalizando el ingreso irregular como si se tratara de un dato más del paisaje. Un Estado que no controla sus fronteras debilita también su capacidad de resguardar el orden interno. Y esa debilidad la percibe la ciudadanía, incluso antes de que aparezca en los informes técnicos.

La discusión de fondo, entonces, no pasa solo por si las nuevas medidas van en la dirección correcta, sino por si serán capaces de sostenerse en el tiempo, de ser entendidas por la

población y de traducirse en presencia real del Estado en la calle, en la frontera y en los barrios. Porque la ciudadanía no necesita campañas comunicacionales mejor diseñadas. Necesita señales concretas. Necesita ver fiscalización, control, recuperación de espacios, persecución penal efectiva y decisiones políticas que no titubeen frente a la gravedad del problema.

Los eslóganes, por sí solos, no van a dar el ancho. Nunca lo han hecho. En seguridad, la confianza no se construye con frases memorables, sino con políticas persistentes. Con instituciones que funcionen. Con autoridades que comprendan que el miedo ciudadano no se responde con autocomplacencia, sino con acción diaria, visible y coherente. Si el gobierno realmente quiere reducir la sensación de temor, debe entender que el desafío no es solo mejorar números, sino reinstalar la idea de autoridad democrática en la vida cotidiana.

Porque al final, cuando el Estado no logra hacerse sentir con claridad, lo que crece no es solo la inseguridad: crece también la impresión de que nadie está realmente al mando.